



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: NIDIA DEL SOCORRO CAÑAS BETANCUR
Demandados: ACP COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 010 2020 00234 01
Sentencia: S-175

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los recursos de apelación interpuesto por la **ACP COLPENSIONES y la AFP PORVENIR S.A.**, así como dar trámite al grado de CONSULTA concedido a favor de **COLPENSIONES**, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 15 de noviembre de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

NIDIA DEL SOCORRO CAÑAS BETANCUR demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo lo siguiente:

“DECLARACIONES PRINCIPALES

PRIMERO: *Se declare la nulidad del Afiliación a la AFP PORVENIR, acto jurídico que carece de validez por existir vicio en el consentimiento, en razón de la omisión del deber información y el no cumplimiento de las obligaciones que taxativamente le señalan los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994.*

SEGUNDO: *Que se declare válida la afiliación de la señora NIDIA DEL SOCORRO CAÑAS BETANCUR, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, hoy administrado por COLPENSIONES.*

TERCERO: *Que se declare que la AFP PORVENIR, está obligada a devolver los aportes realizados por ésta, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES. Sin cobros por administración.*

DE CONDENA:

“PRIMERA: *Que se condene a la AFP PORVENIR, a trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, todos y cada uno de los aportes que el poderdante efectuó al régimen de ahorro individual, incluidos los rendimientos y sin ningún descuento por cuota de administración.*

SEGUNDA: *Que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES a tener como válida la afiliación de la señora NIDIA DEL SOCORRO CAÑAS BETANCUR, al régimen de prima media con prestación definida, hoy administrado por la citada entidad.*

(...)

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 28 de marzo de 1965; que inició sus cotizaciones al Sistema General de Pensiones en el RAIS en julio de 1995, a través de PORVENIR S.A., donde está actualmente afiliada; que al momento de la afiliación no obtuvo la

información suficiente sobre el régimen, no se tuvieron en cuenta sus condiciones particulares, ni se le explicaron los riesgos y beneficios que corría al afiliarse al RAIS; que no le explicaron de manera clara y precisa los riesgos y beneficios que corría al estar afiliada al RAIS; que se solicitó el traslado de régimen ante Colpensiones la cual fue negada por la restricción de la edad; y que por la deficiente asesoría brindada sufrirá un daño en su derecho a la seguridad social, evidenciándose en las proyecciones pensionales que presenta.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES admite como cierta la fecha de nacimiento de la demandante y la solicitud de traslado a COLPENSIONES la cual fue negada por la edad de la demandante. Que no le consta ningún otro hecho por tratarse de circunstancias fácticas ajenas a esta entidad, y/o porque técnicamente no son hechos sino apreciaciones subjetivas del apoderado de la parte demandante. Se opuso a las pretensiones de la demandante. Como excepciones propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir la ineficacia o nulidad de traslado, ausencia de prueba de engaño, equivocada información y perjuicio padecido, indebida aplicación de la carga probatoria, desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, prescripción, buena fe, cobro de lo no debido, imposibilidad de condena en costas, compensación y presunción de legalidad de los actos jurídicos.

PORVENIR S.A. indicó que no le consta la fecha de nacimiento de la demandante; que la demandante suscribió formulario el 26 de julio de 1995, el cual se dio en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la fecha, efectuándose una debida asesoría; y que no le constan los demás hechos, ya que son percepciones de la demandante y por ser ajenos a esta entidad. Se opuso a las pretensiones. Como excepciones propuso la de prescripción, prescripción de la acción de

nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 15 de noviembre de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación de la demandante, y que por tal razón, se declara que ha permanecido afiliada y sin solución de continuidad a COLPENSIONES; **CONDENÓ** a PORVENIR S.A. trasladar con destino a COLPENSIONES el saldo existente en la cuenta de ahorro de la demandante, con sus respectivos rendimientos, frutos e intereses y los bonos pensionales si se hubieren redimido, con cargo a sus propios recursos e indexados, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, gastos de administración y el valor de las primas de seguros previsionales y reaseguros. DISPUSO que al momento de cumplirse la orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el IBC, y demás información que los justifiquen; **CONDENÓ** a COLPENSIONES a recibir de PORVENIR S.A. los valores aludidos e incorporarlos como semanas válidamente cotizadas, imputándolos a los periodos en que fueron al RAIS y de acuerdo al IBC que fueron pagados; y **CONDENÓ** en costas a PORVENIR S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión, el apoderado de COLPENSIONES presentó recurso de apelación, solicitando que se adicione la sentencia manifestando que en el caso de que la sumatoria de todos los conceptos a trasladar resultare inferior a la suma del aporte legal correspondiente, sea PORVENIR S.A. el que responda por esa diferencia, y que también se adicione el fallo especificando la rentabilidad de los dineros mencionados correspondientes en el RAIS y que lo haga aplicando la rentabilidad en el RPM. En este mismo

grado de apelación, solicito no se condene en costas a COLPENSIONES, porque esta entidad fue llamada como tercero a recibir y solo se está pidiendo una aclaración que tiene como derecho la entidad representada de acuerdo con el principio de la estabilidad financiera.

Por su parte PORVENIR S.A. interpone recurso de apelación de acuerdo con que, es claro que en el presente fallo no existen razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado, pues como se indicó en el interrogatorio de parte, la demandante suscribió el formulario de afiliación de forma libre y voluntaria; que si se cumplió con el deber de información; que la demandante contó con múltiples oportunidades para retornar al RPM, pero no lo hizo, lo cual demuestra un interés por la misma de permanecer en el RAIS; que la inconformidad en el presente proceso deriva de un incumplimiento en la mesada pensional, monto que como lo manifiesta la demandante no conoce, por lo que no es extraño que se está buscando la ineficacia por una inconformidad económica y no se tiene en cuenta dicho monto de mesada pensional; que la entidad no se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite la entrega del deber de información, ya que las obligaciones del buen consejo y buena asesoría, e incluso la doble asesoría a los afiliados, son obligaciones que surgen posteriormente; que a la demandante también le asiste el deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, por lo que debe entenderse que se cumplió dicha carga cuando se pretende beneficiarse de su propia culpa y solicitar la ineficacia, encontrándose en la prohibición legal del artículo 2 de la ley 797 de 2003; que con los rendimientos se pueden ver resarcidos todos los conceptos a trasladar, por lo que imponer una condena de indexación supone un enriquecimiento sin causa por parte de COLPENSIONES y una condena doble a la AFP; que imponer la condena por gastos de administración, seguros y aportes al fondo, los mismos son rubros que no se encuentran en el patrimonio de la entidad; y que se debe revocar la condena en costas, ya que no hay razones para declarar la

ineficacia, sumado a que la entidad siempre actuó de buena fe, generando rendimientos en la cuenta de ahorro individual y administrando sus recursos.

Se conoce igualmente del asunto por **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término legalmente concedido, PORVENIR S.A. presentó alegatos de conclusión manifestando que no existen razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia, toda vez que la decisión de la actora fue libre y voluntaria; que en cuanto a la condena de trasladar a COLPENSIONES los valores recibidos por la afiliación debe ser revocada, y además no se debe condenar al traslado de manera indexada; que los efectos de la ineficacia es que las cosas vuelvan a su estado anterior, por lo que estos rendimientos no se debieron haber generado por lo que condenar al traslado de estas se estaría imponiendo una doble condena; que los descuentos de todos los conceptos han cumplido con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP; que la decisión judicial de traslado debe tener como objeto constitucional la sostenibilidad y estabilidad financiera; y que no es procedente la condena en costas, toda vez que la entidad siempre actuó de buena fe.

Por su parte COLPENSIONES manifestó en sus alegatos que la decisión de primera instancia afecta el principio de estabilidad financiera, ya que la afiliación de la demandante a PORVENIR S.A. se hizo de forma correcta; que Colpensiones en ningún momento realizó ninguna actuación omisiva ni contraria a derecho; que la afiliación de la actora se dio en ejercicio de su derecho a la libre elección de régimen; que en el caso que se confirme la sentencia, se debe ordenar al fondo privado que el saldo de la cuenta de ahorro sea

debidamente indexado, sin ningún descuento; y que se deben devolver todos los conceptos, debidamente discriminados.

CONSIDERACIONES:

Lo primero que interesa precisar, es que no se está en este caso en presencia de una eventual ineficacia de un **traslado** desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS - al Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPMPD –, sino de una petición de nulidad de la afiliación primigenia al régimen, o lo que es lo mismo, de la primera vinculación al sistema de pensiones de la trabajadora que apenas se incorpora a la fuerza económicamente activa.

El caso clásico del traslado de régimen, el cual ha sido profusamente desarrollado por nuestra jurisprudencia ordinaria laboral, se ha caracterizado porque, en general, los asesores o promotores de los Fondos Privados de pensiones despliegan una conducta pro activa en la búsqueda de nuevos clientes, en cuyo ejercicio invitan e intentan convencer a las personas afiliadas al RPMPD de COLPENSIONES, para que migren al RAIS administrado por los distintos Fondos Privados. Y ha sido allí, en las falencias que presentan las informaciones que sobre el sistema se les prodiga a los afiliados, donde se ha sustentado la ineficacia del traslado. Formas estas que no siempre se suceden en los casos de la primera afiliación al sistema pensional, a menos que se demuestre lo contrario.

Distintas son las consecuencias de la ineficacia, pues es de la esencia de esta figura que las cosas vuelvan a su estado inicial, como si el acto declarado ineficaz nunca se hubiere producido. Se traduce lo anterior en que, en el evento de la ineficacia del traslado, el afiliado retorna sencillamente a la misma entidad a la cual se hallaba vinculado antes del acto del traslado, esto es, a COLPENSIONES o a cualquier otro Fondo Público en el que viniera afiliado; pero, ¿qué

sucede con la ineficacia de la primera afiliación al sistema, cuando no existe entidad alguna a la cual se entienda previamente afiliada la persona?

Al respecto, esta Sala considera que la propia ley trae las herramientas jurídicas necesarias para dar solución al anterior interrogante, concretamente el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 que establece:

*“**Artículo 271.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. (...)*

La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. (subrayas y negrilla de la Sala).

En el caso bajo estudio, desde la demanda misma y en armonía con la norma anterior, se pretende que, una vez se declare la nulidad de la afiliación, se ordene igualmente a COLPENSIONES tener como válida la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, así como trasladar a COLPENSIONES todos y cada uno de los aportes que la demandante efectuó al RAIS, incluidos los rendimientos y sin ningún tipo de descuento por cuotas de administración.

De suerte que, en su genuino sentido, lo que la norma previó fue la posibilidad de que desde el acto de “**afiliación y selección**” de la entidad a la cual desee vincularse la trabajadora, pueda verse afectado por acciones del empleador, o en general de cualquier persona natural o jurídica, que impidan o atenten en cualquier forma contra su derecho de libre elección o selección. Norma expresa en

este sentido, aún por encima de los **traslados** de régimen que ha aplicado la jurisprudencia del trabajo.

En este orden, se recibió en el proceso el interrogatorio de parte de la demandante, quien, en resumen, afirmó que se afilió a PORVENIR S.A. cuando se posesionó en su primero cargo en la alcaldía en 1995, en donde firmó una serie de documentos que le fueron entregados en el despacho del señor alcalde; que esto fue de forma individual; no hubo ningún tipo de asesoría en dicho momento, ni posterior; que no le información sobre su derecho de retracto y que la AFP no se comunicó con ella antes de cumplir los 47 años.

En los hechos de la demanda la parte demandante enfatiza que al momento de la afiliación no obtuvo una suficiente información sobre las condiciones de su pensión de vejez, las diferencias con el Régimen de Prima Media, sus características positivas y negativas o las distintas modalidades pensionales en el RAIS.

Ahora; al contestarse la demanda por parte de PORVENIR S.A., se observa claramente cómo esta entidad es persistente, reiterativa y pertinaz, en alegar que la demandante le fueron explicadas de manera clara y precisa las diferencias entre los regímenes pensionales existentes y las características propias de cada uno de ellos, con detalle de los conceptos que los conforman, refiriendo con una serie de expresiones a través de las cuales afirma categóricamente que en el caso de la demandante, dicha entidad cumplió con su deber de información adecuada, completa y detallada sobre sus expectativas concretas.

Se desplaza con lo anterior la carga de la prueba al Fondo PORVENIR, en tanto tal cual lo tiene dicho pacíficamente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado – o de la afiliación en este evento concreto - le suministró

a la afiliada la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo.

La jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, y, adicionalmente, se ha establecido que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba que acredite en forma positiva que esa obligación sí se cumplió.

Así lo ha señalado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde las sentencias 31.989 y 31.314 ambas del 9 de septiembre de 2008, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años, como ha ocurrido por ejemplo en las sentencias SL 12136 de 2014, SL 17595 de 2017, SL 1421 de 2019, SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 2611 de 2020, SL 1741 de 2020, SL 1741 de 2021, SL 3537 de 2021, SL 1055 del 2 de marzo de 2022 y la SL 2058 del 4 de mayo de 2022, entre muchas otras.

Del desarrollo jurisprudencial citado se pueden evidenciar una serie de ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado o de la afiliación, y que se resumen en lo siguiente: (i) el juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico; (ii) el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado; y (iii) no es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no existe ningún rasgo probatorio que permita tener por acreditado que el fondo privado le prestó a la demandante una asesoría integral, oportuna, apropiada y adecuada a sus circunstancias personales, como, en términos generales pero insistentes, lo alega en la contestación de la demanda. No hay forma de establecer que a la demandante se le hubieren explicado los contenidos de cada uno de los regímenes pensionales, de tal manera que pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas y así tomar una decisión informada.

El hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación como una formalidad previa para el pago de las cotizaciones, no significa que con ello se haya suministrado una asesoría adecuada, relacionada con las ventajas y desventajas de afiliarse a uno u otro régimen. Lo anterior permite, entonces, dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Lo anterior por cuanto no solo el ya citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 así lo permite, según el análisis que del mismo se hizo con anterioridad, sino que también el artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 lo posibilita en los siguientes términos:

*b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, **quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado**. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier*

forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente Ley; (Subrayas y negrillas de la Sala).

En la sentencia 4803-2021 rad. 88879 del 20 de octubre de 2021, la Corte Suprema en su Sala Laboral hace las siguientes observaciones, que se acompasan con el tema que aquí se trata:

*"La sentencia CSJ SL1688-2019, efectuó una reseña histórico-normativa, enfatizando que desde el comienzo mismo del funcionamiento del Sistema General de Pensiones, las Administradoras han tenido el deber de informar con transparencia a los afiliados **y a quienes potencialmente puedan serlo**, respecto de todos los aspectos técnicos inherentes a los regímenes pensionales existentes, como una expresión de responsabilidad en una actividad profesional que se ejecuta en el marco regulatorio del servicio público de Seguridad Social, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, según lo dispone el artículo 48 de la CN, siendo las dos primeras actividades mencionadas una manifestación típica de política pública y, la última, una materialización de la inspección y vigilancia que corresponde ejercer a través del ente especializado para el efecto. (Destaca esta Sala)*

(...)

*"Por ello se ha sostenido que existe toda una batería normativa de carácter especial que reguló la materia **en cuanto a la afiliación en seguridad social en pensiones, y la calidad y oportunidad de la información suministrada por parte de las AFP** que debe precederla, lo cual concatena, además, con el argumento ya pacífico en la Sala, de que en estos casos hay inversión de la carga de la prueba, en favor del afiliado, como se explicó, entre otras, en la misma providencia que se viene citando: (Destaca la Sala)*

*“En consecuencia, si se arguye que, **a la afiliación, la AFP** no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.”*

Ahora bien; no es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció la demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, la vinculación de la demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a darse una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual, junto con los

rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

Es así, como tampoco es de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frete al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar.

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por PORVENIR S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

De lo anterior debe indicarse que no es ello más que una consecuencia de la aplicación del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, cuando establece que *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Y así fue concebida la pretensión tercera declarativa y primera de condena, en punto a solicitar expresamente el traslado de aportes, rendimientos y demás conceptos a la ACP COLPENSIONES.

Dicha obligación de traslado ha sido considerada en múltiples pronunciamientos jurisprudenciales, que, aunque referidos al tema de la ineficacia del traslado, en lo sustancial puede aplicarse también a los eventos de la afiliación. Esto en el sentido de que el efecto de la ineficacia es volver las cosas a su estado anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que se ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente, cambiando lo que haya que cambiar:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

Todo lo anterior sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

"En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021)."

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la

consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Por otro lado, se advierte igualmente que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, contrario a lo que sostiene el apoderado de PORVENIR S.A., dicha Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara y reciente en la sentencia SL 3349 del 28 de julio de 2021, rad. 88826 en la que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *“... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”*

En lo que tiene que ver con la orden del a quo, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor del actor, tal decisión resulta desacertada, toda vez que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será precisada.

No obstante, en lo que respecta al cálculo de equivalencia solicitado por el apoderado de COLPENSIONES, ha de decir la Sala que tal decisión no es consistente con el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, pues en estos casos, el criterio de este órgano jurisdiccional no ha tenido variación en cuanto, una vez verificada la ineficacia del acto, lo procedente es la devolución de todos los valores que por aportes hubiere recibido con motivo de la afiliación de la actora, incluyendo lo descontado para cubrir las primas de los seguros previsionales, gastos o comisiones de administración, aportaciones al fondo de garantía de pensión mínima, con todos los rendimientos, frutos e intereses, como se indicó con anterioridad (SL2877-2020, radicado 78667); razón por la cual esta solicitud no podrá salir avante.

Ahora bien, no desconoce la Sala la tesis según la cual, cuando de la primera afiliación se trata, no es factible acudir a la ficción legal construida en materia de ineficacia del **traslado** pues no existiría una afiliación previa a otro régimen al cual se le pudiesen remitir las cotizaciones y montos determinados (v. gr. SL 4211-2021 Rad. 85164), pues, no se trata aquí de disponer el retorno o devolución de los recursos a COLPENSIONES, donde ciertamente la demandante nunca estuvo afiliada, sino de disponer la transferencia de los mismos con base en el poder jurídico que a ella le otorga el ya varias veces citado artículo 27 de la ley 100, en el sentido de que al dejarse sin efectos la afiliación inicial, el afiliado podrá realizarla de nuevo en forma libre y espontánea.

Finalmente, otro tema que cuestiona el apoderado de PORVENIR S.A. a través de su recurso de apelación, tiene que ver con la **condena en costas** impuesta a su cargo. Para resolver la inconformidad que plantea la recurrente, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,

o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso PORVENIR S.A. presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas el cumplimiento del deber de información y la validez del acto jurídico de traslado, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será **CONFIRMADA y PRECISADA.**

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, 15 de noviembre de 2022, pero **PRECISANDO** que en el evento tal que se hubiese pagado bono pensional tipo A, a favor de la demandante, la devolución del importe de este debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES. Respecto del importe de bono pensional distinto al tipo A, se confirma que debe ser entregado a COLPENSIONES.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Salvamento de voto.



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Demandante: NIDIA DEL SOCORRO CAÑAS BETANCUR
Demandados: COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 010 2020 00234 01

Medellín, veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

FRANCISCO ARANGO TORRES, magistrado de la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, presento SALVAMENTO DE VOTO en la sentencia del proceso de la referencia, en los siguientes términos:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su afiliación al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando la afiliación al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora, que, inició sus cotizaciones al Sistema General de Pensiones en el RAIS en julio de 1995, a través de PORVENIR S.A., donde está actualmente afiliada. Que al momento de la afiliación no obtuvo la información suficiente sobre el régimen, no se tuvieron en cuenta sus condiciones particulares, ni se le explicaron los riesgos y beneficios que corría al afiliarse al RAIS. Que no le explicaron de manera clara y precisa los riesgos y beneficios que corría al estar afiliada al RAIS; que se solicitó el traslado de régimen ante Colpensiones la cual fue negada por la restricción de la edad; y que por la deficiente asesoría brindada sufrirá un daño en su derecho a la seguridad social, evidenciándose en las proyecciones pensionales que presenta.

A juicio de este servidor judicial, para resolver la controversia planteada, es necesario tener en cuenta que la afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, el cual dispone en el literal b) lo siguiente:

“b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley.”

Así mismo, el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 dispone:

“Artículo 271: El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario.

(...)

La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”

De igual forma, el artículo 11 del Decreto 692 de 1994, por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993, hoy compilado en el artículo 2.2.2.1.8 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, establece:

“DILIGENCIAMIENTO DE LA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN. La selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias de éste, para acceder a las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y demás prestaciones económicas a que haya lugar.

La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos en los artículos anteriores es libre y voluntaria por parte del afiliado. Tratándose de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar.”

Del análisis de las normas legales antes transcritas, se concluye que la afiliación a cualquier régimen pensional es libre y voluntaria y se concreta mediante el diligenciamiento, firma y entrega del formulario, lo cual es un requisito necesario para poder acceder a las prestaciones del Sistema General de Pensiones. No obstante, en caso que cualquier persona impida o atente contra el derecho de libre afiliación y selección del régimen, se hará acreedor las sanciones previstas en el Art. 271 de la citada Ley 100, que dispone que dicha afiliación quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente.

Ahora, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, ha consolidado una línea jurisprudencial para los casos de ineficacia de traslado de régimen pensional, es decir, en aquellos eventos en que el trabajador se encontraba afiliado a un régimen pensional (usualmente el de prima media con prestación definida) y que por omisión o falta de información, los asesores promovieron el traslado a otro régimen pensional (usualmente el de ahorro individual con solidaridad), jurisprudencia que no puede ser aplicada a este caso, pues la actora no se encontraba previamente afiliada a ningún régimen pensional, toda vez que su primera afiliación la realizó en el RAIS, por lo que para que su afiliación pudiera estar afectada por nulidad o ineficacia, se requeriría que cualquier persona hubiera **impedido o atentado** contra el derecho de libre afiliación y selección del régimen, no que no le hubiera suministrado asesoría para escoger uno u otro régimen pensional, pues en este caso no hay con qué otro compararlo al que ya hubiera estado afiliada la demandante, del que tuviera una expectativa creada.

En este orden, contrario a lo que sucede con la ineficacia del traslado de régimen pensional, cuando se trate de la primera afiliación, es carga del trabajador probar que su empleador o algún empleado de la AFP de cualquiera

de los dos regímenes al que se afilió, **le impidió afiliarse al otro, o atentó contra el derecho de libre afiliación y selección del régimen**, lo que no está acreditado en el proceso, pues en el mismo ninguna prueba existe que el empleador de la demandante haya sido quien le indicó que se afiliara al RAIS o a una determinada AFP, e incluso si estuviera ello probado, tal acto no se podría considerar como una acción que le hubiera impedido a la actora afiliarse al régimen pensional de prima media, pues bien había podido rechazar la sugerencia de afiliación, y solo en caso de fuerza para aceptarla, se podría considerar que se atentó **contra el derecho de libre afiliación y selección del régimen**.

Así, la situación de la accionante, dista de los casos analizados por la Corte Suprema de Justicia en los asuntos de ineficacia del traslado de régimen pensional y en ese sentido, no sería posible hacer una inversión de la carga de la prueba que ha establecido la jurisprudencia de la CSJ para los caso de ineficacia del traslado de régimen pensional, sino que es la parte demandante quien a la luz del artículo 167 del CGP aplicable al proceso laboral por remisión del artículo 145 del CPTSS, a quien le incumbe demostrar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, es decir probar en este caso, que la AFP PROTECCIÓN S.A. o su empleador atentaron contra el derecho a la libre afiliación y selección del régimen pensional, o le impidieron escoger libremente, aspectos que ni siquiera los fundamentos de hecho de la demanda contemplan.

En el presente asunto, es relevante que la actora tuvo muchos años para haberse trasladado al RPM, aún en el caso que alguna persona hubiera impedido o atentado contra el derecho de libre afiliación y selección del régimen pensional de prima media, entre el año 1996 que se afilió al RAIS y el cumplimiento de la edad de 47 años como límite para cambiar de régimen pensional transcurrieron muchos años.

De esta manera, la suscripción del formulario de afiliación sin vicio de error, fuerza o dolo, constituyeron actos jurídicos válido, sin que exista prueba alguna en el plenario que persona alguna, natural o jurídica, hubiese atentado contra el derecho de la demandante a seleccionar el régimen pensional que quisiera, es decir que su vinculación al RAIS, es completamente eficaz, pues de forma libre y voluntaria, sin prueba de presión alguna suscribió el formulario de afiliación

con la AFP PROTECCIÓN S.A., en cumplimiento esta solemnidades que legalmente se exigía en el momento, razón por la cual produjo los efectos de una afiliación válida al RAIS.

No sobra manifestar que quienes se afilian al RAIS, objetivamente les representa algunas ventajas frente a quienes a se afilian al RPM como son: **i)** La devolución de saldos, de no cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes, es mucho más favorable en su monto que la indemnización sustitutiva que reciben el en RPM. **ii)** Tienen la garantía de pensión mínima de vejez con 1150 semanas cotizadas que no la tienen quienes escogieron el RPM, los que con posterioridad al año 2010 no pueden acceder a la pensión si no cuentan al menos con 1175 semanas las que se incrementaron en los años siguientes hasta 1300 semanas en el año 2015. **iii)** En el evento que fallezca un afiliado la RAIS sin que tengan beneficiarios que legalmente puedan acceder a la pensión de sobrevivientes los dineros existentes en su cuenta de ahorro pensional pasan a sus herederos, lo que no ocurre en el régimen pensional de prima media, pues los dineros cotizados no son devueltos. **iv)** Si el pensionado en el RAIS ha escogido la modalidad de retiro programado y fallece sin tener beneficios de la pensión de sobrevivientes, los saldos existentes en su cuenta de ahorro pensional, pasan a sus herederos, lo que no ocurre en el régimen pensional de prima media, pues los dineros cotizados no son devueltos, por lo que es inadmisibile que quien escogió por primera vez el RAIS, después muchos años de ser potencial beneficiario de las prerrogativas de este régimen pensional, cuando ya están cerca a obtener la pensión de vejez, motivado en que dicha pensión en el RPM es de mayor valor pidan la ineficacia de su afiliación la RAIS.

Ahora en lo que tiene que ver con el monto de la pensión que obtendría la demandante en el régimen de prima media comparado con el que alcanzaría en el RAIS a la misma a la edad mínima de 57 años del RPM, en el año 1995 que la demandante se afilió al RAIS, nadie podía predecir si le resultaría más favorable en el régimen de prima media o el de ahorro individual, pues el monto de los ahorros pensionales con la que se financia esta prestación en el RAIS y del que se deriva el monto de esta prestación, depende de situaciones económicas y financieras favorables o no respecto de los negocios que realizan los fondos de pensiones privados en el mercado para obtener dividendos o

rendimientos financieros sobre los ahorros de las cuentas pensionales de sus afiliados.

Pero es más, tanto en el RAIS como en el RPM, el monto de la pensión, influyen situaciones futuras del afiliado, que pertenecen al mundo del azar, unas y a decisiones libres del afiliado otras, pues si un afiliado al RAIS decide hacer vida marital o casarse con una persona de muy joven o tener hijos a avanzada edad cuando está a punto de obtener la pensión de vejez, ello necesariamente influirá en el monto de la pensión, o si por ejemplo en el RPM por azar el afiliado pierde el empleo que le irrogaba un buen salario y no puede seguir cotizando con un buen ingreso base de cotización en los últimos 10 años, el valor de su pensión se va a ver menguado.

Es decir que el monto de la pensión en el RAIS, puede ser favorable o perjudicial al afiliado comparado con el monto de la citada prestación en el RPM dependiendo de los vaivenes de la economía, no pudiéndose entonces, como en el caso de la accionante esperar casi veinticinco años para saber si le fue o no más favorable la afiliación al RAIS en lo que concierne al monto de la pensión, para solicitar la nulidad o ineficacia de la afiliación, pues ello conduciría a que los afiliados a uno u otro régimen pensional manipularan el sistema pensional a conveniencia según las circunstancias del momento en el que puedan sacar provecho, pues por ejemplo si un afiliado al RAIS después de largos años de haber escogido este régimen pensional encuentra que el monto de la pensión de vejez le fue perjudicial ello derivaría una nulidad o ineficacia de la afiliación, pero si le resulta favorables obtener una de las ventajas antes descritas en el RAIS su afiliación no es nula o ineficaz.

Lo mismo ocurriría con un afiliado al RPM que al no tener las ventajas de los afiliados al RAIS antes mencionas, después de largos años de haberse afiliado por primera vez y permanecer en el RPM, si ve la conveniencia de aprovecharse los benéficos del RAIS, demandaría la ineficacia de su afiliación al RPM aduciendo que no le explicaron o no supo de las ventajas del RAIS; como por ejemplo quien cuenta con 1150 semanas cotizadas con las que no puede obtener la pensión de vejez en el RPM, pero sí en el RAIS, o en el caso de quien no alcanzó el derecho a una pensión en el RPM, resultándole más conveniente la devolución de saldos del RAIS que la indemnización sustitutiva

del RPM, caso en el cual demandaría la ineficacia o nulidad de su afiliación al RPM, para poderse beneficiar de las prerrogativas del RAIS, manipulado así a su antojo y conveniencia el sistema pensional.

Respecto del posible monto de la pensión en el RAIS, frente al que obtendría en el RPM que es lo que motiva a la actora a solicitar la ineficacia de su afiliación al RAIS, no puede constituirse en motivo de ineficacia de la afiliación. Al respecto se pronunció la SCL de H. CSJ en la sentencia de radicación 31.989 de septiembre 9 de 2008, MP: Dr. Eduardo López Villegas, en los siguientes términos:

“Un segundo conjunto de elementos son las proyecciones que, a partir de los datos anteriores, se construyen con fórmulas actuariales, y que dan cuenta del posible valor de la pensión en el sistema de ahorro individual, y su comparación con la que recibiría en el régimen de prima media; el valor de la primera, dando por admitida la corrección de las fórmulas, de su aplicación y de su pertinencia, es una proyección cuyo resultado final, depende del comportamiento real e histórico de variables, como el rendimiento financiero de los fondos, razón por la cual, del mero hecho de no cumplirse las expectativas, no puede predicarse engaño.”

Igualmente, sobre la no procedencia de la ineficacia de la primera afiliación al RAIS, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias SL 3414 de 2022 y SL- 1806 de 2022. En esta última adujo la Corte lo siguiente:

“Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que lo que puede invalidarse es el acto de traslado entre regímenes, no la selección inicial, y menos cuando no existe acto previo de afiliación al sistema pensional. De esa forma, no puede aceptarse que la violación del deber de informar afecta directamente la validez del acto jurídico de vinculación al sistema, pues no existe, antes de ese acto ninguna expectativa, aún simple, de consolidar un derecho.”

Finalmente, es necesario manifestar que si la razón para declarar la ineficacia, es que la AFP del RAIS, no le suministró información a la demandante sobre las características del RAIS, igual ineficacia comportaría la afiliación que se ordena en el fallo de primera y segunda instancia al RPM de COLPENSIONES, pues no existe prueba en el proceso que esta entidad le haya otorgado información a la actora, sobre las características del RPM, es decir los beneficios y perjuicios de la pertenencia a este régimen pensional, en comparación con el del RAIS

Por las razones anteriormente explicadas, respetuosamente me aparto de la decisión de la Sala mayoritaria de CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, pues por las razones explicadas considero que debió ser revocada, para en su lugar absolver a las demandadas de todas las pretensiones de la actora.

En los anteriores términos dejo salvado mi voto en la decisión de la Sala mayoritaria.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c830b8af682123cbc17b5383a389b2b0a1913cdefb40a1c680f83cd11d834ace**

Documento generado en 22/06/2023 03:33:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>